

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

**Auto interlocutorio –segunda instancia-**

Santiago de Cali, tres (3) de julio de dos mil veinte (2020)

**Radicación No.** : 76001-33-33-0012-2017-0286-01  
**Medio de control** : EJECUTIVO  
**Demandante** : ALIRIO ISAAC CASTILLO PIAMBA  
**Demandado** : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN  
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA  
PROTECCION SOCIAL

**Mag. Ponente** : FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

Procede la Sala Segunda de Decisión, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto No. 174 del 7 de marzo de 2018, por el cual el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, decretó el embargo de dineros en cuentas bancarias que tenga la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social<sup>1</sup>.

**AUTO APELADO.**

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali<sup>2</sup>, decretó el embargo de dineros en cuentas bancarias que tenga la UGPP y limitó la medida en la suma de \$300.000.000.

**FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA APELACIÓN.**

Inconforme con la decisión anterior la parte demandada decidió recurrirla en apelación, argumentando que<sup>3</sup>, los dineros que posee en cuentas la UGPP son de naturaleza inembargable.

**CONSIDERACIONES:**

<sup>1</sup> En adelante UGPP.  
<sup>2</sup> Folios, 48-49.  
<sup>3</sup> Folios, 45-47

### 1. Competencia.

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación incoado contra el auto que decretó la medida cautelar, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 243 del CPACA.

### 2. Marco de la decisión.

No se efectuará ningún pronunciamiento respecto al monto del crédito y al alcance de la medida, habida consideración que sobre esos puntos no recayó la censura que forja el apelante.

Lo cual implica que, esos aspectos quedaron definidos en el auto de primera instancia y, excluidos de la controversia que tendrá que resolverse, al socaire del artículo 320 del C.G.P.

### 3. Problema jurídico.

¿Los dineros en cuentas que posee la UGPP son de naturaleza inembargable y por tanto se debe levantar la medida cautelar de embargo decretada por el juzgado de primera instancia?

### 4. Marco normativo.

La inembargabilidad de las rentas y recursos públicos, en nuestro ordenamiento jurídico, es una regla general que tiene asidero jurídico en el artículo 63 de la Constitución Política.

Leamos:

“ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación **y los demás bienes que determine la ley**, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

El Presupuesto General de la Nación, se compone del presupuesto de rentas, que contiene la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto; los fondos especiales; los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional; y del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones que incluyen los gastos de las tres Ramas del Poder Público, el Ministerio Público, la Contraloría General de la Republica, la Organización Electoral y los Establecimientos Públicos Nacionales (Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994 y la Ley 225 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”)

El Decreto 111 de 1996, en su artículo 19 establece:

"ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>  
Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.

**Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta** (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6o., 55, inciso 3o.). (Negrillas fuera del texto original).

A su turno, la Ley 1593 de 2012 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2013", dispone:

"ARTÍCULO 37. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos **y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias**".

De acuerdo con estas disposiciones son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la Corte Constitucional, en las sentencias C-546 de 1992, C-354 de 1997 y C-1154 de 2008, estableció que esa regla no es absoluta y admite cuando menos tres (3) excepciones, atendiendo los principios de reconocimiento de la dignidad humana, la vigencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo.

En las sentencias C-546 de 1992 y C-354 de 1997, el Tribunal Constitucional, al realizar el control de constitucionalidad de los artículos 8, parte final y 16 de la Ley 38 de 1989, "Normativa del Presupuesto General de la Nación." y el artículo 19 del Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995

que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto", respectivamente, concluyó que el principio de inembargabilidad de las rentas del Estado, admite las siguientes excepciones:

**1- El pago de obligaciones laborales**, ello con el objeto de garantizar el principio de la dignidad humanada y hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas.

**2- El pago de sentencias judiciales**, ello con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichos fallos.

**3- El pago de títulos emanados del Estado** que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

El Consejo de Estado, igualmente sostiene que el principio de inembargabilidad de las rentas y recursos públicos no es absoluto y, acepta las enunciadas tres (3) excepciones. Leamos:

El Despacho resalta que, por tratarse de disposiciones con un contenido normativo semejante – artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y 594 de la Ley 1564 de 2012- al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en las providencias que consolidaron el precedente que establece excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y condiciona la interpretación constitucional adecuada de los nuevos preceptos legales, **en el sentido de reconocer la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, pero aceptando que hay tres excepciones relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias o títulos ejecutivos emanados del Estado, las cuales permiten el embargo excepcional de dichos recursos, siempre que la obligación ejecutada se encuadre en alguna de ellas y que, en el caso de embargo de recursos que tienen destinación específica, se haya constatado que con el embargo de otros recursos de la entidad deudora no se logre cubrir la totalidad de la acreencia<sup>4</sup>.**

#### 4. Caso concreto.

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, decretó el embargo de dineros en cuentas bancarias que tenga la UGPP y limitó la medida en la suma de \$300.000.000.

La UGPP apeló aduciendo que los recursos que maneja son públicos y, por tanto, inembargables.

Para la Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión, el principio de inembargabilidad no es absoluto sino que admite cuando menos tres excepciones dentro de las que se encuentran el **pago de sentencias judiciales**, ello con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichos fallos.

<sup>4</sup> Consejo de Estado – Sección Tercera, auto del 14 de marzo de 2019 Radicación número: 20001-23-31-004-2009-00065-01 (59802, C.P.: María Adriana Marín.

Para el caso concreto lo que, se persigue es la ejecución de las sumas de dinero contenidas en las sentencias Nos. 196 del 2 de noviembre de 2010<sup>5</sup> y 032 del 30 de agosto de 2012<sup>6</sup> proferidas por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali y la Sala Laboral en Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente.

De manera que, al encontrarnos ante dos (2) providencias judiciales que han sido incumplidas sin justificación alguna por parte de la entidad ejecutada, la consecuencia lógica que se sigue es que la intangibilidad de sus bienes y recursos necesariamente ceden frente a la obligación de satisfacer los derechos del señor Alirio Isaac Castillo Piamba.

Por consiguiente, se confirmará el auto por medio del cual el juzgado de primera instancia decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que tenga o llegare a tener en cuentas la UGPP.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

**RESUELVE:**

**CONFIRMASE** el auto No. 174 del 7 de marzo de 2018, por medio del cual, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que tenga cuentas bancarias la UGPP, acorde con lo expuesto en esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia, previas las anotaciones de rigor en el Sistema Judicial "Justicia Siglo XXI"

Providencia discutida y aprobada en sesión de hoy. Acta No. 034.

Los Magistrados,

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

RONALD OTTO CEDENO BLUME

JHON ERICK CHAVES BRAVO

<sup>5</sup> 2-16.

<sup>6</sup> Folios, 18-23.